

# Secretos incómodos

La Prensa de Estados Unidos, con el *New York Times* a la cabeza, se enfrenta a renovados dilemas a la hora de compatibilizar sus obligaciones informativas con el respeto a la seguridad nacional y las tácticas de un Gobierno que se considera en guerra desde la ofensiva terrorista del 11-S.

**PEDRO RODRÍGUEZ**

**A** Henry Kissinger –personaje inevitable en algunas de las más legendarias batallas políticas, burocráticas, diplomáticas y periodísticas en Washington– se le atribuye la definición de un secreto como aquello que uno nunca quiere leer en la portada del *New York Times*. A pesar de una merecida reputación de operar en una Casa Blanca impermeabilizada contra las filtraciones indiscretas y de un poco disimulado desdén hacia el llamado Cuarto Poder, la Administración Bush se ha venido enfrentando a algunos de sus mayores escándalos precisamente por la luz periodística arrojada sobre algunas de las más controvertidas tácticas aplicadas desde el 11-S en la lucha contra el terrorismo.

Aunque no es novedad que el *New York Times* nunca ha sido el periódico favorito de los conservadores en Esta-

dos Unidos, la ofensiva de frontales ataques y vitriólicos reproches planteada de un tiempo a esta parte por la Casa Blanca y sus aliados contra uno de los principales diarios del mundo ha servido para ilustrar con estridencia las tensiones cíclicas que genera compatibilizar la libertad de prensa, consagrada en la ejemplar primera enmienda constitucional del gigante americano, con delicadas cuestiones de seguridad nacional. Especialmente en un mundo globalizado con amenazas terroristas que parecen empeñadas en sacar del diccionario el concepto de ‘imposible’.

El gran *casus belli* para el último encontronazo entre los poderes ejecutivo y periodístico en Estados Unidos ha sido la publicación de detalles sobre un programa internacional dedicado a vigilar y rastrear en secreto las transacciones financieras de sos-

**Pedro Rodríguez**, periodista, es corresponsal del diario *Abc* en Estados Unidos.

pechosos de terrorismo vinculados con Al Qaeda. Aunque *Los Angeles Times* y el *Wall Street Journal* también aportaron respectivamente sus propios detalles sobre estas actividades de espionaje bancario con acceso a transacciones financieras con un valor diario de 6 billones de dólares, las iras de la Casa Blanca se han concentrado con diferencia en lo publicado el 22 de junio por el *New York Times*.

El presidente George W. Bush no dudó en calificar estas filtraciones como una vergüenza mientras que el vicepresidente Cheney ha cuestionado abiertamente los méritos del legendario diario con sede en la calle 43 West de Manhattan para hacerse continuamente acreedor de premios Pulitzer. Algunos congresistas republicanos han solicitado el enjuiciamiento al *New York Times* en virtud del Acta de Espionaje de 1917 por poner en peligro la seguridad de Estados Unidos. Además de llegar a pedir a los servicios de inteligencia dirigidos por John Negroponte un análisis de los daños incurridos por estas informaciones.

El director del *New York Times*, Bill Keller, ha atribuido esta peculiar e intensa tormenta de ataques –a la que

se han sumado con gusto algunos medios conservadores– al resentimiento acumulado desde que el diario divulgó en diciembre del 2005 la existencia de un programa internacional de escuchas con ramificaciones extrajudiciales dentro de Estados Unidos. Aunque Keller no ha dudado en reconocer

que existen preocupaciones legítimas ante los espinosos tiempos que corren, el responsable de los contenidos del *New York Times* ha enfatizado que cuando llega la hora de tomar decisiones sobre noticias de este tipo “siempre empiezo con la premisa de que nuestro trabajo es publicar información”.

La bronca desencadenada ha llegado hasta tal nivel que el director del *Times* publicó el 25 de junio una inusual carta a los lectores explicando su decisión de sacar a la luz la historia sobre espionaje bancario a pesar de las advertencias formuladas por altos cargos de la Administración Bush. Según Keller: “Los que inventaron nuestro país concibieron una prensa agresiva e independiente como medida protectora contra los abusos de poder en una democracia y como un ingrediente esencial del auto-gobierno. Rechazaron la idea de que es sabio o patriótico creerse siempre lo que dice el presidente, o



## Ofensiva conservadora contra *The New York Times*.

rendir al ejecutivo importantes decisiones sobre lo que se publica”.

A pesar de estos planteamientos, determinadas publicaciones conservadoras como *National Review* no han dudado en editorializar que cada día “es más aparente que descontentos izquierdistas en los servicios de inteligencia y los cruzados anti-guerra en medios de comunicación dominantes, unidos por su desdén hacia la Administración Bush, están minando nuestra habilidad de ganar la guerra contra el terror”. Además de insistir en que se debe identificar y procesar agresivamente a las fuentes gubernamentales responsables de filtraciones que favorecen al enemigo en tiempos de guerra. Persecución en la que, a su juicio, se debería hacer entender a los medios que no son inmunes a estas pesquisas gracias al escudo de las fuentes confidenciales.

El *Weekly Standard*, el semanario opinativo del imperio Murdoch en Estados Unidos, ha llegado a declarar como conclusión innegable que el *New York Times* es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Denunciando que el celebre diario se encuentra “tan borracho de su propio poder y es tan antagonista de la Administración Bush que expone cualquier clasificado programa anti-terrorista que encuentre, sin importar su legalidad, el cuidado puesto para salvaguardar libertades civiles o lo vital que sea para proteger vidas de estadounidenses”.

## El Parlamento de papel

Ignacio Fontes y Manuel Ángel Menéndez, dos tomos (1.180 y 544 páginas), 70 euros.

Un ensayo sobre la historia de la prensa no diaria del franquismo crepuscular: la existente, la que nació en esos años para oponerse a la dictadura, y la espectacular floración que sucedió a la muerte de Franco, que elevó su número por encima de 7.000 títulos.

**DE VENTA EN LA A.P.M.**



En las antípodas, Robert G. Kaiser, director adjunto del *Washington Post*, ha apelado directamente a los lectores argumentando: “Usted puede haberse escandalizado por estas revelaciones, o haberle dado igual, ¿pero hubiera preferido no saberlo? Si una guerra es librada en nombre de Estados Unidos, ¿no deberían entender los estadounidenses como se está librando esa guerra?”. Kaiser, que empezó a trabajar en el *Post* en 1963, insiste en que seguridad y secretismo no son la misma cosa.

Dentro de la intensa historia de las relaciones entre la Casa Blanca y los medios de comunicación de Estados Unidos, estos dilemas sobre seguridad nacional no son precisamente algo nuevo. El presidente Kennedy, por ejemplo, logró que el *New York Times* se callase la anticipada exclusiva de la invasión de Bahía Cochinos. Richard Nixon llegó a crear una unidad de ‘fontaneros’ para erradicar perjudiciales filtraciones a la prensa. Y la Administración Reagan también pasó por el rito de amenazar con encausar a periodistas que divulgasen trascendentales secretos oficiales.

Precisamente, el director del *New York Times* ha utilizado el caso de la

fallida invasión cubana de Bahía Cochinos a su favor. Según Keller, “nuestro trabajo es publicar información si estamos convencidos de que es ponderada y precisa y algunos de nuestros mayores fracasos se han producido generalmente cuando no hemos escarbadado lo suficiente o informado por completo. Nuestro periódico no aprovechó su conocimiento anticipado de la invasión de Bahía Cochinos, y supuestamente el propio presidente Kennedy dijo que hubiera deseado que hubiésemos publicado lo que sabíamos y quizá se hubiera evitado un fiasco”.

Con todo, en el caso del espionaje bancario lo que ha llamado la atención es que la Administración Bush se haya concentrado con tanta ferocidad en un solo medio, al que algunos comentaristas, contertulios, locutores y bloggers –por cierto, con mayoritario respaldo popular, según las encuestas de opinión *ad hoc*– no han dudado en desacreditar como una especie de “combatiente ilegal” que actúa en beneficio de Al Qaeda. Sin que falten comparaciones estridentes incluso con la conducta de Julius y Ethel Rosenberg, los espías ejecutados al comienzo de la Guerra Fría por pasar decisivos secretos nucleares a la

Seguridad y secretismo no son la misma cosa.

Unión Soviética. Además de resucitarse consignas de máxima discreción patriótica, como salidas directamente de la propaganda de la Segunda Guerra Mundial cuando se advertía que hablar más de la cuenta podía costar la vida de estadounidenses.

A juicio de figuras como William Bennett, ex secretario de Educación con la Administración Reagan y peso pesado del movimiento conservador, la situación ha llegado a alcanzar un nivel sin retorno en el que la prensa parece empeñada en negar al Gobierno de Estados Unidos el necesario secreto de vitales operaciones anti-terroristas. En contraste, para Lucy Dalglish, directora ejecutiva del Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa, resulta casi ilusorio pensar que este tipo de informaciones ayuden a los enemigos de Estados Unidos, ya que cualquier terrorista “razonablemente listo” opera sabiendo de antemano que sus transacciones financieras o sus comunicaciones corren siempre el peligro de ser interceptadas. De hecho, pocos días después del 11 de septiembre del 2001, el presidente Bush prometió públicamente un esfuerzo concertado contra las transacciones financieras de los terroristas.

Dentro de esta significativa discusión, Jonathan Turley, profesor de Derecho de la George Washington University, ha argumentado que este conflicto ilustra cómo los medios de comunicación han venido asumiendo el

papel de única salvaguardia contra potenciales abusos de la Casa Blanca. Un contexto de tensiones acumuladas que se remontaría a noviembre del 2004 y la embarazosa exclusiva del *Washington Post* sobre la existencia de una secreta red internacional de prisiones extrajudiciales a cargo de la CIA. Y donde también figuran las críticas de la Administración Bush ante la obsesión por las ‘malas noticias’ procedentes de Iraq exhibida por los medios comunicación tras el derrocamiento de Sadam Husein.

En un nivel superior, el debate planteado también se entrelaza con el monopolio político disfrutado en Washington por los republicanos hasta las elecciones del pasado noviembre. Un control de las dos Cámaras del Congreso que durante mandato y medio del presidente Bush habría impedido al poder legislativo cumplir con sus obligaciones de fiscalización. Y que se habría visto extendido por el supuesto cheque en blanco otorgado a la Administración Bush tras el trauma del 11-S.

Como munición adicional para este visceral cruce de ataques, los defensores del *New York Times* han argumentado que la Administración Bush no se encuentra precisamente calificada para dar lecciones a nadie sobre responsabilidad o ética periodística. Al presentar un historial bastante cuestionable que incluye la diseminación doméstica de vídeos de propaganda oficial en forma de noticias; el

pago de dinero a ciertos columnistas estadounidenses para defender algunas de sus principales iniciativas legislativas; la incentivada publicación de historias favorables en la prensa iraquí; e incluso la filtración de secretos oficiales en su beneficio como apunta el dañino caso de la espía delatada (saga detallada en el texto ‘La espía, el gurú electoral y la periodista’ publicado en el número 4 de *Cuadernos de Periodistas*).

Ante el significativo precio político provocado por todas estas revelaciones periodísticas, el presidente Bush ha intentado la estrategia de apelar personalmente a la autorregulación de los periódicos más destacados. Y ha llegado a celebrar en la Casa Blanca poco habituales reuniones *off the record* con la plana mayor de diarios como el *Washington Post* o el *New York Times* para contener el escrutinio sobre las más controvertidas tácticas anti-terroristas aplicadas por su Gobierno durante los últimos cinco años.

Todas estas discretas apelaciones a la responsabilidad no han tenido éxito con una falta de sintonía que no debería sorprender en el paradigma de relaciones entre periodistas y políticos consagrado en Estados Unidos

desde la *saga de Watergate*. Además de otros factores más recientes como los sentimientos de misión incumplida o incluso culpabilidad más o menos reconocida entre los grandes medios estadounidenses por no haber escudriñado y cuestionado mucho más el camino seguido por la Administración Bush hasta llegar a la guerra de Iraq.

Dentro de esta conflictiva relación también habría que incluir la mezcla de desdén, indiferencia e incomodidad manifestada por la Administración Bush hacia la prensa, con un presidente que públicamente ha manifestado no leer periódicos salvo las páginas de deportes. Sin olvidar, por supuesto, a un ex jefe de gabinete como Andrew Card que insistía abiertamente en que los periodistas “no representan más al público que otras personas ya que en nuestra democracia la

gente que representa al pueblo se ha presentado a una elección”. O el gurú electoral Karl Rove, de la opinión de que el trabajo de los periodistas “no es necesariamente informar sobre noticias sino conseguir un titular o una historia que haga que la gente preste más atención a sus revistas, diarios o televisiones”.

Como parte de estos enfrenta-

Las relaciones informativas con la cúpula de la Administración Bush han dejado siempre bastante que desear.

mientos, la Administración Bush también comparte el viejo reproche de los conservadores de Estados Unidos contra la prensa elitista. Críticas que insisten en colocar a los periodistas estelares de Washington como parte de una élite que por su nivel social y económico no tiene nada en común con la mayoría de los estadounidenses, incluida una querencia compartida hacia la izquierda en contraste con una supuesta mayoría sociológica más escorada hacia la derecha.

Por parte de la Casa Blanca, todos estos reparos se han traducido en una estrategia de mantener la mayor distancia posible con respecto a la prensa, percibida en círculos gubernamentales como un grupo de interés más. Aunque al mismo tiempo, la Administración Bush no ha renunciado a intentar controlar la agenda informativa a su favor, experimentando con la conocida táctica de 'puentear' a los grandes medios para acceder directamente a la opinión pública estadounidense.

Del otro lado de la barrera, la brillante periodista Elisabeth Bumiller, hasta ahora uno de los varios corresponsales permanentes del *New York Times* ante la Casa Blanca, no dudaba en quejarse en las páginas del *New Yorker* (19 de enero del 2004) sobre cómo las relaciones informativas con la cúpula de la Administración Bush han dejado siempre bastante que desear. A juicio de la redactora, ahora en excedencia para escribir un libro,

## Los cronistas de la Constitución

Manuel Ángel Menéndez Gijón  
y Carmen Fernández López-Monís,  
446 páginas, 25 euros.

Una antología de los mejores artículos, viñetas y fotografías de las Cortes constituyentes (1977-1978).

**DE VENTA EN LA A.P.M.**



sus interlocutores oficiales “nos tratan demasiado a menudo con desprecio”. Recordando que “en comparación, la Administración Reagan nos mimaba” mientras que el actual Gobierno “ha levantado un muro y nunca se sale de sus consignas”.

Aunque en honor a la verdad, las personas acreditadas con perspectiva no encuentran muchas novedades en esta polémica de enfrentadas soberbias en grado superlativo. Ben Bradlee, el legendario director del *Washington Post*, en su autobiografía *A Good Life* publicada en 1995, sentenciaba como “a los directores de periódicos –y a los redactores y especialmente a los dueños– no les gusta ser acusados de ofrecer ayuda y consuelo al enemigo, incluso cuando saben que esas acusaciones son falsas. Se irrita a los chiflados e iluminados del mundo y se genera un montón de correspondencia innecesaria y malhumorada”.

Como parte de esta letanía, el director del *New York Times* y su rival de *Los Angeles Times* han llegado a publicar un artículo conjunto detallando las dificultades de cubrir los esfuerzos de un Gobierno en su intento de evitar nuevos ataques terroristas. Tanto Bill Keller como Dean Baquet se han

declarado “no neutrales” en la lucha contra el terrorismo pero herederos del pulso a la Casa Blanca planteado hace casi cuatro décadas por los *Papeles del Pentágono*, la historia secreta de la guerra de Vietnam que intentó censurar la Administración Nixon; con advertencias de que “si la libertad de Prensa

inquieta a algunos estadounidenses, es un anatema para los ideólogos del terror”.

Tanto Keller como Baquet hablan de un proceso que comienza con fuentes quizá asustadas, incompletas o con ganas de saldar cuentas, pero que es seguido por un duro trabajo de periodistas que carecen de acceso secreto oficiales, poderes para confiscar o tecnología de espionaje. Después llega el turno de escuchar a los responsables oficiales implicados en estas historias con la opción de silenciar algunos detalles.

Pero, finalmente, hay que cuantificar los méritos de publicar o callar dentro de una responsabilidad que en ningún caso puede transferir la prensa al Gobierno. Y sin perder de vista que “no hay una fórmula mágica, un ordenado sistema métrico para calibrar el interés del público o los peligros de publicar información delicada”.



La responsabilidad de publicar o no publicar es de la prensa, nunca del Gobierno.